

de la psiquiatría, sino porque el saber psiquiátrico se construye en interacción con la sociedad y la cultura a la que pertenece, lo cual se demuestra muy bien en este libro. Al leerlo tomamos conciencia de que se puede hacer una psiquiatría más comprometida.

Cristina Sacristán

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

IGNACIO ALMADA BAY, *La conexión Yocupicio. Soberanía estatal y tradición cívico-liberal en Sonora 1913-1939*, México, El Colegio de México, 2009, 407 pp. ISBN 978-607-462-011-5

En *La conexión Yocupicio*, Ignacio Almada Bay expone una dinámica procesión de actores sociales, hechos, lugares e hipótesis, convocados para responder la interrogante que dio pábulo a la investigación cuyos resultados presenta: por qué afloraron diferencias tan visibles entre los gobiernos del presidente Lázaro Cárdenas y del sonorenses Román Yocupicio entre 1937 y 1939, en ámbitos tan sensibles como el religioso, el agrario y el laboral. El propósito es elucidar, desde la perspectiva regional, los detalles finos que modelaron la construcción del Estado-nación posrevolucionario, en un tiempo clave donde se definieron muchos de los rasgos que le caracterizarían en las siguientes cinco décadas.

El periplo que abarca el estudio registra la manifestación de dos rubros fundamentales para el análisis: el tema de la soberanía estatal y las tradiciones políticas antagónicas identificadas por el autor: la cívico-liberal y la autoritaria-populista. La etapa de 1913 a 1939 se desmenuza con el abordaje de momentos coyunturales, como fueron la revolución maderista, el gobierno de José María Maytorena Tapia, el dominio obregonista, los gobiernos callistas y la ruptura Calles-Cárdenas, cuyo impacto más rele-

vante en Sonora fue el gobierno de Román Yocupicio quien, durante su gestión, confrontó con denuedo las políticas agraria, sindical y religiosa dictadas desde el centro, a las que contrapuso iniciativas con raigambre local, ancladas en la tradición cívico-liberal. El autor explica que los desacuerdos políticos entre Cárdenas y Yocupicio rebasan el ámbito de defensa de la soberanía estatal como se le había concebido anteriormente, expresada reiteradamente en el desconocimiento del gobierno nacional; tales diferencias, sostiene, sólo encuentran explicación en la confrontación de dos culturas políticas en Sonora: la cívica y la corporativa.

¿Cómo caracteriza el autor cada una de las corrientes políticas? La cívico-liberal se define por el énfasis puesto en el individuo (el ciudadano), la importancia concedida al municipio, el impulso de prácticas democráticas y su propósito de “retener el poder local en manos locales”, por lo cual ve con recelo y opone resistencia a las disposiciones emitidas desde el gobierno central; es partidaria de un gobierno federal y representativo oponiéndose al federalismo excluyente; no comulga con el jacobinismo y, en los años de los que se ocupa *La conexión Yocupicio*, tuvo sus seguidores ciudadanos entre profesionales, empleados, pequeños y medianos empresarios, mientras en el campo se adherieron a ella los pequeños propietarios y quienes aspiraban a serlo (pp. 134-137).

En contraparte, la tradición autoritaria-populista, encabezada por Obregón y Calles, tiene como constante que sus líderes no hicieron política de oposición durante el porfiriato, sino que despuntaron militarmente en el combate al orozquismo y huertismo y ascendieron por méritos militares. En esta corriente, la política se hace con decretos emitidos desde el ámbito del poder al que arribaron por las armas, no por la vía electoral; busca “matricular” a la población en las oficinas públicas, es decir, privilegia la corporación por encima del ciudadano y favorece la negociación extraelectoral sobre las elecciones, además de ser anticlerical (p. 149).

Respecto a la urdimbre histórica que tejió ambas tradiciones, Ignacio Almada afirma que la cívico-liberal (y su bandera la soberanía) tiene su abrevadero en las postrimerías de la colonia cuando, en un ambiente de frontera, las leyes se ajustaban a las circunstancias del entorno en un contexto de instituciones débiles y protagonismo de los vecinos quienes, recurriendo a juntas y representaciones, participaban activa y directamente en la definición de los proyectos sociales (p. 14). Más tarde, en el siglo XIX, esta tradición se nutrió del liberalismo constitucional y se reforzó con el hecho de que el pueblo preexistió al ayuntamiento (p. 139).

En la siguiente centuria “despuntó con el maderismo, gobernó con el maytorenismo, nutrió la resistencia maytorenista (1916-1920), reapareció con el vasconcelismo, resistió al callismo, a su salida (1935) resurgió semi-victoriosa, respaldó a Yocupicio en la campaña política por la gubernatura en 1936 y formó parte de su gobierno” (p. 134). Luego sus adherentes votarían por Juan Andrew Almazán y, finalmente, engrosarían las filas del Partido Acción Nacional en la década de 1940. El autor sostiene que esta corriente, previa a la revolución de 1910, “no fue asimilada por la facción triunfante” (p. 24), cuyas acciones derivaron en la tradición autoritaria-populista.

El libro expone la trama histórica modelada por la confrontación de tales corrientes políticas en el escenario local y en un contexto de forja del Estado-nación revolucionario. Si bien destaca el protagonismo de un actor político, ofrece un retrato nítido de actores clave en el periodo y su afiliación a cada una de las tradiciones. La “proliferación onomástica y topográfica” que alberga la obra permite al lector apropiarse de “gentes, hechos y lugares” antes escamoteados por la historiografía, tomando como hilo conductor a un “personaje menor y desconocido” como fue Román Yocupicio (p. 13). El propósito del autor se cumple gracias a la diversidad y riqueza de fuentes primarias en que fundamen-

tó la investigación, destacando los acervos del Archivo General del Estado de Sonora, Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, Arizona Historical Society, Archivo Elías Calles-Torreblanca, así como los archivos particulares de Román Yocupicio, Agustín Gutiérrez y Manuel Gómez Morín.

Un gran acierto de Ignacio Almada Bay fue la inclusión de los indígenas mayos y yaquis en el complejo escenario social y político. Es bien sabido que ambas etnias constituyeron fecundos venenos de soldados para el ejército de Álvaro Obregón, no obstante lo cual son escasamente mencionados en la historiografía sobre la Revolución. El autor expone en el primer capítulo un completo panorama de las transformaciones ocurridas en los valles del Yaqui y Mayo a partir de la secularización de los pueblos de misión y de la resistencia opuesta por ambas etnias a lo largo del siglo XIX. Para el caso de los mayos enfatiza la evidente desarticulación de su organización social en las últimas décadas del siglo XIX y su posterior alianza con las fuerzas obregonistas. Yocupicio mismo fue un indio mayo del pueblo de Masiaca.

Almada traza, en el segundo capítulo, la carrera militar y política de Román Yocupicio, resaltando su clara filiación obregonista. Asimismo, da cuenta del recurrente uso de la soberanía estatal entre 1913 y 1929 e informa de los momentos en que tal bandera política fue esgrimida en el siglo XIX. La soberanía estatal, explica el autor, “era una práctica y un sentimiento colectivo derivado del aislamiento geográfico respecto a los centros de autoridad de todo orden”. Tal sentimiento se reforzó con los triunfos contra filibusteros y franceses, así como con “la tradición fronteriza de vecinos armados y una imagen de resistencia espartana” (p. 77). En el ambiente revolucionario, la soberanía fue el escudo para desconocer a Victoriano Huerta, combatir a Orozco y fundamentar los planes de Agua Prieta (1920) y de Hermosillo (1929).

El autor ofrece un recuento de las expresiones de la tradición cívico-liberal durante la etapa revolucionaria, destacando el amplio apoyo obtenido por Francisco I. Madero y la figura protagónica del gobernador José María Maytorena, confrontado con los carrancistas entre 1914 y 1915, año en que fue derrotado militarmente. La fuerza del maytorenismo y el arraigo de la tradición cívico-liberal se expresaron en la prolongada resistencia social y las virulentas acciones de los callistas para sofocarla. Con el triunfo del plan de Agua Prieta (1920) se inaugura lo que el autor llama “el condominio Obregón-Calles en Sonora” (p. 178).

Una vez en la presidencia de la República, Álvaro Obregón (1920-1924) y Plutarco Elías Calles (1924-1928) recrearon el centralismo con sus políticas corporativas sostenidas en la tradición autoritaria-populista, cuyo rechazo manifestó en 1924 la rebelión delahuertista; su derrota marcó la “completa apropiación del poder” por los líderes de esta corriente política, poniendo “fin a lo que quedaba del liberalismo político en México” (p. 188). El derrotero de esta corriente fue puesto de nuevo en jaque por la efímera revolución renovadora, promovida por obregonistas distanciados de Calles en 1929. Para el autor, este año fue decisivo y de profundos alcances en la política sonorensa: los veteranos revolucionarios fueron derrotados, llegó a su fin el tiempo de las “alianzas verticales” entre indígenas y no indígenas, finiquitándose asimismo el obregonismo anticallista y la exitosa campaña vasconcelista; a todos los anteriores factores se añadieron los efectos de la crisis mundial (p. 202).

Este año marcó el rumbo franco para la corriente autoritaria-populista cuya estafeta tomaron en Sonora gobernantes leales a Plutarco Elías Calles, quienes ejecutaron un agresivo programa de “reemplazo de lealtades” provocando de inmediato intenso descontento social y una aguda acumulación de agravios que estallaron en 1935 (p. 206). Fue sin duda Rodolfo Elías Calles quien con mayor ahínco buscó “refundar” Sonora, castigando a abigeos

y tomadores, expulsando chinos y sacerdotes —incluso al obispo Juan Navarrete y Guerrero—, promoviendo un reparto agrario concertado y un “sindicalismo domesticado” de asalariados y empresarios; contra los opositores políticos alimentó “un clima de intimidación y delación; contra los reincidentes, destierro, encierro o entierro” señala Ignacio Almada (p. 217).

¿Cuáles lealtades exigía para sí el Estado-nación? En primer término, fidelidad al presidente de la República, al gobierno del centro, al sindicato, ejido, partido oficial y escuela socialista. Las fidelidades que buscó reemplazar fueron “las lealtades a la región, a la religión, al domicilio, al común, al mutualismo, a la pequeña propiedad, al patrón y a la autoridad social, derivada del ascendiente o liderazgo que resulta de acciones sociales desde la esfera no gubernamental ni partidista, es decir, desde la sociedad civil” (pp. 15 y 209).

El mayor agravio sentido por los sonorenses, incluyendo a los indios mayos, fue el que transgredió su libertad religiosa. Una constante detectada por el autor en las fuentes históricas fue la notable frecuencia de enfrentamientos sociales con trasfondo religioso. Tal hecho, señala, “resulta contrastante para una sociedad de frontera, caracterizada como más secularizada que la del centro del país y que no registró mayor actividad relacionada con la primera cristiada”, preguntándose a qué obedeció que esta sociedad, atendida desde el siglo XVIII por escaso clero, cuna de los dirigentes de la facción triunfadora de la revolución, haya dado “muestras de una militancia religiosa. ¿Qué fibras se tocaron y qué resortes de la sensibilidad colectiva se presionaron para desatar una resistencia vigorosa y dispersa por la geografía sonorenses?” (pp. 205-206).

En el proyecto de “refundación” social, la educación jugó un papel fundamental; para implantar el nuevo orden manejó representaciones sociales contrarias a las predominantes, al incorporar contenidos sexuales y socialistas; las escuelas extendieron su

ámbito de influencia al hogar, el trabajo y la autoridad. En 1934 el gobernador asestó el golpe definitivo contra sus adversarios, la confrontación con la Iglesia católica fue directa al desarrollarse la “campana desfanatizadora”; como los sacerdotes acicateaban a los padres de familia para que no enviaran a sus hijos a la escuela socialista, el gobernador decretó la expulsión del clero en mayo de 1934; suspendió el culto, clausuró templos y escuelas católicas (p. 236).

En tal confrontación, Rodolfo Elías Calles recibió el respaldo de las organizaciones obreras y campesinas nacidas bajo su patronazgo. Por su parte, los maestros y maestras que se opusieron a la orientación socialista en la educación renunciaron o fueron expulsados de las escuelas de gobierno en una época de crisis económica. Fueron, explica Ignacio Almada, doblemente agraviados: “en sus creencias y en luchar desventajosamente por ganarse la vida, al quedar proscritos de los empleos de gobierno. Otros agraviados eran los padres de familia que no estaban de acuerdo con la orientación de la escuela. El papel del domicilio en la educación era puesto en entredicho [...]” (p. 238).

Los padres de familia respondieron con una “huelga de escolares” (p. 244) pero el gobernador fue aún más allá: ordenó a los presidentes municipales que “impidieran a los niños asistir a cualquier tipo de acto religioso” (p. 245), medida que exacerbó el ánimo de los paterfamilias, presentándose protestas callejeras y enfrentamientos con la fuerza pública. En este clima de fuerte polarización social se sumó un agravio más: la quema de santos en ciudades, pueblos y comunidades indígenas; a los mayos se les prohibió celebrar sus fiestas religiosas, aunque con los yaquis hubo mayor flexibilidad (p. 256). En 1935 explotó la polarización desatada por la campana desfanatizadora; la resistencia social encontró múltiples formas de expresión; los católicos quemaron banderas rojinegras y reclamaron la devolución y reapertura de los templos, provocaron tumultos (como el de Bacobampo),

durante el otoño se presentaron movimientos armados en varios puntos del estado (Altar, Magdalena, Moctezuma, Quiriego y en los pueblos mayos); en diciembre ocurrió la ruptura Calles-Cárdenas y fue depuesto el gobernador Ramón Ramos.

El malestar social previo a la llegada al poder de Román Yocupicio tuvo un abrevadero múltiple: la imposición de sindicatos oficiales, el predominio de una creciente burocracia, la educación socialista y sexual y, ante todo, el conflicto con la Iglesia católica estimulado por el gobernador Rodolfo Elías Calles; tales agravios se magnificaron por una mayor intervención del gobierno central en la entidad, la federalización de la educación, el sindicalismo cetemista y los crecientes litigios en el campo laboral (p. 207). El conflicto social que estalló en 1935 expresó el “choque que resultó del reemplazo de las lealtades que emprendieron los gobiernos callistas y cardenista, como parte de la reconstrucción del Estado-nación” (p. 207).

En tal contexto de crisis, los agraviados por el callismo advirtieron la oportunidad de recuperar espacios políticos: renovadores, veteranos obregonistas, vasconcelistas, maytorenistas, indígenas opuestos a la desfanatización, mujeres, maestros y maestras expulsados, padres de familia y desplazados por el sindicalismo oficial, todos apoyaron la candidatura de Román Yocupicio, veterano de la Revolución e “indígena nativo del estado” (p. 276). ¿Cómo explicar —se pregunta el autor— que Yocupicio haya salido triunfante del proceso interno del PNR y, sobre todo, que haya logrado el reconocimiento de Cárdenas?

En primer lugar el Partido Nacional Revolucionario quedó maltrecho en Sonora como consecuencia de la ruptura Calles-Cárdenas. Un factor adicional para que el presidente no interviniera de manera activa en la selección de candidato fue que no contaba con el respaldo de una base popular obrero-campesina y, ante todo, debió valorar el clima de polarización social y el amplio apoyo aglutinado en torno a Yocupicio, en particular el de vete-

ranos, yaquis y mayos. Cárdenas tenía interés en un gobierno que garantizara la paz pública, debilitara y controlara a callistas y dependiera “en algún grado” del presidente de la República. Román Yocupicio cumplía con tales expectativas (pp. 298-299).

De inmediato Yocupicio entró en litigio con el gobierno central; manejó “una solución local, concertada y paulatina de la cuestión agraria” en tono muy similar a la desplegada por Rodolfo Elías Calles, basada en el establecimiento de colonias agrícolas para veteranos, beneficiando en primer lugar a los nacidos en Sonora; tal solución fue opuesta “al reparto ejidal fraguado en la capital, fulminante, masivo, que licuaba lugareños y fuereños”. En oposición al sindicalismo centralizador de Vicente Lombardo Toledano, el gobernador promovió y apadrinó la formación de la Confederación de Trabajadores de Sonora (CTS) y la Unión de Veteranos de la Revolución en Sonora, aceleró la devolución de los templos católicos y puso fin a la persecución religiosa al autorizar el regreso del obispo Juan Navarrete y sus sacerdotes expulsados en 1934 (pp. 302 y 306), acciones que coincidieron con el desvanecimiento del radicalismo cardenista después de marzo de 1938.

En el sexto capítulo Ignacio Almada desarrolla el tema de “los radicalismos del centro” poniendo gran énfasis en el reparto agrario y menos en el sindicalismo apadrinado por Cárdenas e impulsado por Vicente Lombardo Toledano; afirma que, en su gestión de dos años ocho meses, Yocupicio atenuó “los planes más radicales” del gobierno federal. En el último tramo del periodo cardenista se advierte “una coexistencia menos rijosa” entre nuevas y viejas lealtades, bajo el acuerdo de que éstas no disputaran el control del estado ni la economía (p. 362).

La conexión Yocupicio constituye un notable aporte historiográfico que invita a conocer mejor una etapa convulsa en la historia regional y nacional. Ofrece una perspectiva fina, rigurosa, detallada, de gran utilidad para comprender las formas (proyectos políticos, actores y acciones sociales) mediante las cuales Sono-

ra se sumó a la construcción del Estado-nación posrevolucionario, moldeado con el troquel de la tradición autoritaria-populista y que perduró —maltrecho, cierto— hasta la década de 1980.

La lente analítica forjada por Almada Bay con la perspectiva de las tradiciones en cultura política mostró su eficacia para ordenar y comprender los caóticos elementos de la acción social en unos años agitados, en los que se expresaron con suma violencia diferentes concepciones que buscaban orientar el cambio social. Ignacio Almada deja clara la trayectoria histórica y los abrevaderos de la corriente cívico-liberal y su bandera política, la soberanía estatal, enarbolada también por la corriente contraria, la autoritario-populista, cuyas raíces no son expuestas con claridad en *La conexión Yocupicio*, por lo que cabe preguntarse cuáles factores confluyeron para que, en el ambiente revolucionario se gestara y adquiriera tal fuerza esta tradición política?

Por otra parte, el tema de la soberanía estatal parece trascender los límites de las dos corrientes, pues ambas se la apropiaron y utilizaron en distintos momentos para dar sentido y legitimidad a sus acciones. Ignacio Almada Bay afirma que “la soberanía estatal es una trama tejida para evitar la injerencia de las autoridades centrales en la región y preservar las prerrogativas alcanzadas desde el periodo colonial. Pero también es una práctica colectiva, una identidad regional que se transmite de generación en generación entre los lugareños [...]” (p. 18). El arraigo de tal elemento identitario puede ayudar a comprender la recurrente defensa de la soberanía estatal en otros momentos de la historia regional, incluso actuales.

El tema ha cobrado significación de nuevo en los días que corren, debido a la tensión manifiesta en las relaciones gobierno federal-gobierno estatal a causa del manejo político de la desgracia ocurrida en la Guardería ABC de Hermosillo; el discurso del gobernador Ernesto Bours y de muchos sonorenses, expresado en medios de comunicación, ha tomado como defensa la soberanía

estatal oponiéndose a un federalismo que busca vulnerarla, fundamentando sus acciones precisamente en esa tradición regional.

Dora Elvia Enríquez Licón
Universidad de Sonora

MARIO BARBOSA CRUZ, *El trabajo en las calles; subsistencia y negociación política en la Ciudad de México a comienzos del siglo XX*, México, El Colegio de México, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, 2008, 301 pp. ISBN 9681213343

La mirada sostenida de Mario Barbosa Cruz sobre los trabajadores en las calles de la ciudad de México a principios del siglo xx nos aporta una perspectiva de cómo las condiciones de trabajo influyeron sobre la negociación política durante un momento histórico en el cual muchos otros trabajadores hacían lo mismo. Los trabajadores en las calles no se parecían del todo a otros trabajadores en cuanto a las formas de negociación política dada su posición dentro de la economía y los matices de sus relaciones de trabajo. Sobre todo, dado que sus lugares de trabajo eran espacios públicos, los proyectos “modernizadores” de las élites tuvieron un impacto quizás mayor en las condiciones de trabajo de este sector de la fuerza laboral. Desde hace décadas o quizás siglos, muchos han comentado sobre este sector de la población, tanto viajeros extranjeros como mexicanos periodistas, cronistas, y políticos. El estudio de Barbosa Cruz, ganador del premio Salvador Azuela (2006), toma en cuenta tales comentarios, pero basa su investigación en los archivos municipales, periódicos de la época, estadísticas y peticiones de los mismos vendedores, para guiar al lector dentro del mundo de los trabajadores en las calles. El